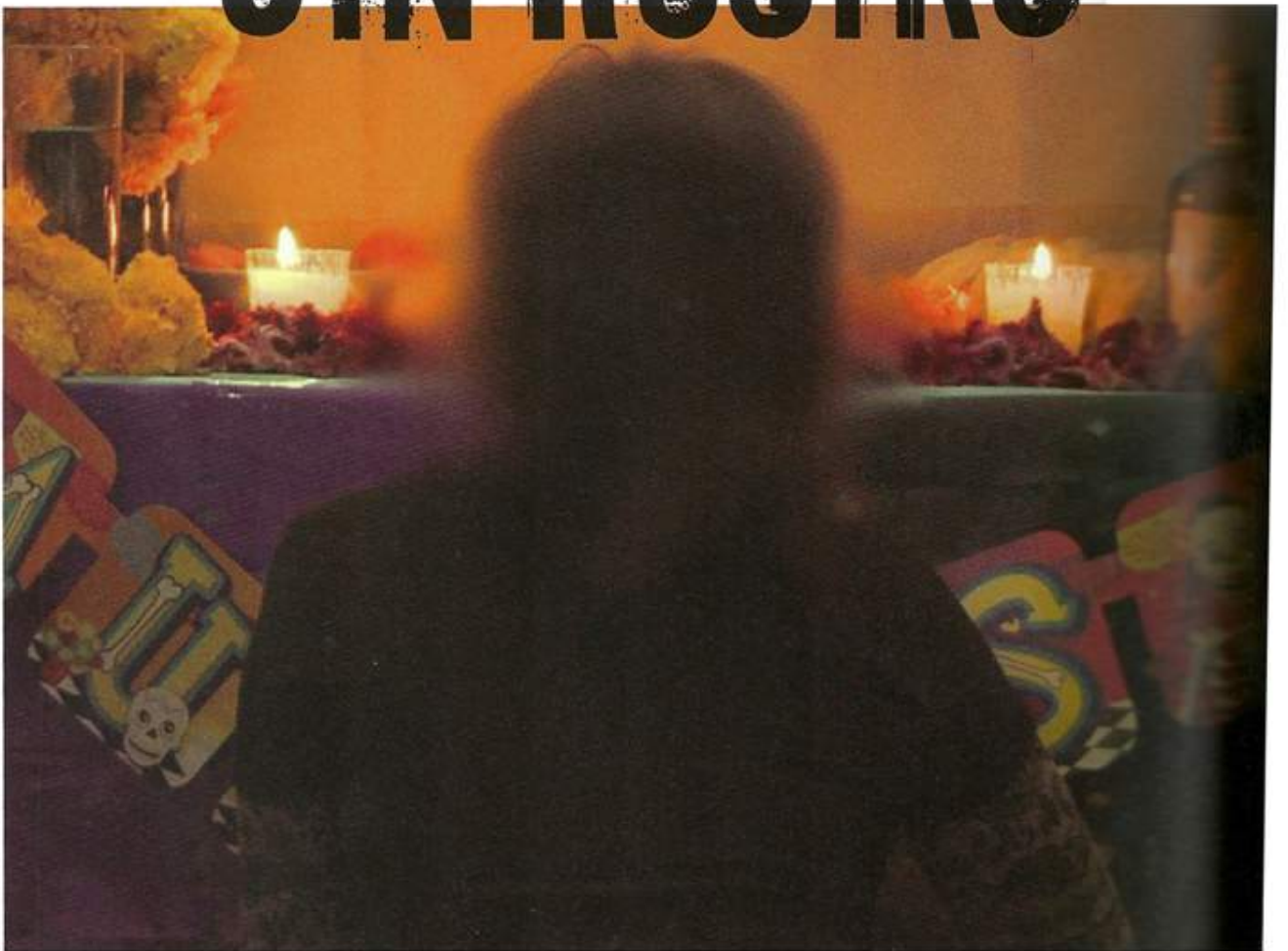


REPORTAJE “LOS HUERFANOS SIN ROSTRO”, REVISTA FIVE N°2 PUBLICADA 3 DE DICIEMBRE DE 2013 (Autor: María Verza, corresponsal en México de Periodismo Humano) www.periodismohumano.com



LOS HUÉRFANOS

SIN ROSTRO



Texto *María Verza*

Imágenes *Fotogramas del documental «Mataron a mi papá»*

SON MILES, no se les ve, menos se les escucha. Son las víctimas más invisibles de la guerra del y contra el narco que comenzó en 2006 en México. Son las cenizas después de la batalla que pueden convertirse en abono de más violencia o en el inicio de una sociedad en paz. Depende. Las pocas instancias oficiales que les brindan apoyo solo llegan a atender a una mínima parte de los afectados.

«Veníamos en el carro, yo sentía que nos estaban aventando piedrazos y pensé “no pasa nada con los piedrazos”, pero de repente gritó mi hermanita y fue cuando vi a mi papá. Le seguían aventando balazos, luego yo me agaché y mi hermanita también, pero cuando se fueron, volví la cabeza y vi que regresaron a terminarlo de matar». La niña de ocho años, que llamaremos Lupe para garantizar su seguridad, cuenta la historia del asesinato de su padre, con ella como testigo, con una frialdad que da miedo. Quizás el mismo que ella confiesa entre dientes cuando se le pregunta por qué no quiere salir a jugar al parque. «Me da miedo... que... que me vayan a matar».

«Tiene miedo a los hombres y lo primero que hace es mirarles las manos por si llevan pistola», dice su ma-

dre. La niña resultó herida en una pierna, pero lo que más preocupa a su familia son las secuelas psicológicas. «No paraba de decir que se quería morir como su papá y que odiaba a esos malditos, fijate, una niña de ocho años diciendo eso».

Después de unas horas, Lupe coge confianza y muestra orgullosa su cuaderno con los trabajos que hizo en el Taller de Duelo de la ONG Casa Amiga, un colectivo que, alertado por las necesidades de los pequeños, comenzó a ofrecer este servicio en 2011. En varios de los dibujos de Lupe salen su papá, su mamá y su hermanita pequeña, de dos años, que juguetea a su lado y que quiere participar en la explicación balbuceando. «Esa soy yo y ese mi papá muerto, nosotras lo vimos, estábamos en el carro».

La conversación transcurre lejos de miradas curiosas, dentro de una casa de un barrio humilde de Ciudad Juárez. Pero podría haber sido en cualquier otra ciudad, en cualquier otro estado de México. Porque, con más de setenta mil muertos y veinticinco mil desaparecidos desde 2006 (cifras oficiales), esta guerra ha llegado a casi todas las esquinas del país con mayor o menor intensidad.

La periodista Daniela Pastrana recordaba en 2010 cómo un bebé se estrelló en el piso cuando su padre, que lo llevaba en brazos, fue asesinado. O una serie de fotografías, no publicadas en la prensa local, que mostraban a un niño de cinco años y una niña de tres viendo a su madre desangrarse. Su coche había sido atacado en una carretera de Chihuahua cuando volvían de la playa. El cuerpo sin cabeza de su padre Mario Alberto Iglesias, de treinta y dos años, apareció horas después en un paraje cercano. Su esposa, María de Jesús Magallanes, quedó agonizante y murió días después en el hospital.

Para calcular el número de huérfanos que está dejando el conflicto, una de las ONG que más ha trabajado en este tema, Ririki, hace una estimación estadística. «Pensemos que solo la mitad de los muertos del país tuvieran hijos. La media de hijos por mexicano es dos. Solo así tendríamos setenta mil huérfanos, pero podrían ser muchos más», explica la coordinadora del colectivo, Nashieli Ramírez.

No hay estadística oficial al respecto y de todos estos niños y niñas de rostro y nombre desconocidos solo se atiende a un puñado. No se sabe su número real ni siquiera en Chihuahua, el único estado donde, al menos, hay un fondo específico, llamado FANVI, para ayudar a estos huérfanos. «Hay cien millones de pesos (unos seis millones de euros) en el fideicomiso y en los dos años que el fondo lleva funcionando solo se han gastado treinta millones. Con ese dinero se han atendido 6133 menores», explica el secretario técnico de FANVI, Fausto Javier Tagle. Se les ofrecen uniformes, becas escolares, apoyo alimenticio y terapia.

El problema es que muchos, como la madre de Lupe, no confían en nada oficial. El miedo les puede y los enormes índices de corrupción del país les quitan la idea. Las estimaciones de la sociedad civil elevan a veinte mil los huérfanos de Chihuahua, pero el funcionario asegura que se ayuda «a todos los que han pedido el apoyo». «Si hay más huérfanos, no lo sé. FANVI se ha dado a conocer», añade Tagle. Y pone un ejemplo que bien podría demostrar lo contrario. «Hoy mismo he atendido a una mujer que pedía ayuda para su hijo porque mataron al papá en 2008».

Ciudad Juárez, igual que Tijuana, fue uno de los lugares de México que antes vivió el horror. Luego siguieron otros muchos de Tamaulipas, de Coahuila, de Nuevo León, de Veracruz, de Michoacán... Como es habitual, la sociedad civil reaccionó antes que los gobiernos. Y en Juárez, aunque la alarma la habían dado diversos investigadores desde hacía tiempo, solo hace unos años que varias ONG comenzaron a asistir a los niños.

El proceso, cuenta el equipo de psicólogas de Casa Amiga, no fue fácil. «Que los niños te contaran las cosas que veas por la tele fue horrible. La gente se cree

que a nosotros no nos afecta, pero sí. Después de los talleres tenemos que ir también a terapia», explica Sihulín Castellanos.

Sus recursos, sin embargo, son escasos y, como dice otra de las psicólogas, Adriana Ontiveros, «es muy peligroso no atender este problema porque pueden quedar en el niño muchas emociones». «Pueden desarrollar una depresión y vivir toda su vida en depresión, pero también generar coraje, un resentimiento por lo que pasó, y eso les puede llevar a meterse en una pandilla para hacer lo mismo que le hicieron a su papá».

Brian, otro nombre ficticio, sabe bien de lo que habla la terapeuta, aunque nunca trató con ningún especialista cuando era niño. Tenía diez años cuando asesinaron a su padre. Ahora tiene veinticuatro, pero no ha olvidado nada. «Le quemaron la mitad del cuerpo y la otra mitad lo tasajearon (navajearon) y le mocharon (aplastaron) la mitad de la cabeza. Y a mi madrastra la quemaron completamente, pero con él se ensañaron más». Al recordar, respira hondo. No le gusta hablar de aquello. Sabe que fue el comienzo de su infierno. «Ahí empecé a ser violento. Me gustaban las armas y a través de un policía amigo conseguí una», cuenta. «A los diecisiete años maté la primera vez», confiesa durante una conversación que tiene lugar en un descampado en plena frontera donde los criminales rematan a sus víctimas. Las palabras le duelen. «Si hubiera recibido ayuda psicológica, tal vez nada de esto hubiera pasado», se lamenta con tristeza.

No quiere contar los cadáveres que tiene a sus espaldas, a los que ejecutó como miembro de una pandilla de Juárez. «Eran trofeos para nosotros». Entró en la cárcel y salió peor, convertido en «una escoria social», como él mismo dice. Sin embargo, algo cambió para él cuando su bebé murió y estaba a punto de tener otro hijo. «Pensé “quiero cambiar, quiero cambiar...”».

No todos pueden, pero él parece que lo consiguió de mano de una ONG, Sembradores de Paz, que une a víctimas con victimarios con un único requisito: que todos rechacen la violencia. «Aquí no juzgamos a nadie, sabemos lo que son y trabajamos con quien quiere trabajar con nosotros, aunque no siempre es fácil», repiten sus miembros.

El Gobierno de Felipe Calderón, del PAN, abrió un programa de centros infantiles, más centrado en apoyar a las madres que a los niños, y firmó protocolos de ayuda a los menores afectados por la violencia para que ninguna Lupe más se convirtiera en otro Brian. Pero una de las pocas decisiones tangibles, casi al final de su mandato, fue la puesta en marcha de Províctima, un sistema federal de atención que, aunque positivo, tiene muchas limitaciones, según denunciaron diversos colectivos sociales.



Este servicio comenzó a operar a principios de 2012 y en año y medio ha atendido a cuatro mil cuatrocientos menores según sus datos. «Pero la mayoría (dos mil doscientos) nos llegan por violencia familiar y abusos sexuales», explica el director del área de Psicología, Jesús Moreno. «Son muy pocos los que llegan por causas que pudieran estar vinculadas al crimen organizado». Ese, sin embargo, fue el motivo teórico de su creación. El miedo y la desconfianza, aseguran las ONG, vuelve a dejar a las víctimas encerradas en sus casas. Si el servicio no va a ellas, ellas no van a pedir ayuda.

Con la llegada de Enrique Peña Nieto (PRI) a la presidencia en diciembre de 2012 vio la luz la primera Ley de Víctimas de México, que entró en vigor el pasado mes de febrero pero que todavía no cuenta ni con recursos ni con un reglamento, ambos imprescindibles para su puesta en marcha.

«El descuido, el desinterés, el abandono que tiene el Estado mexicano para con las víctimas de la guerra es total, es absoluto», denuncia el académico y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua

Gustavo de la Rosa Hickerson. «Inclusive llegan al extremo de no considerar víctima a los hijos de los vinculados con la delincuencia. No entienden que los huérfanos, sea por lo que sea, al haber muerto sus padres se convierten en víctimas sociales».

Por eso De la Rosa urge a prestar atención a los niños y jóvenes que serán el futuro de México. «Francia y Alemania se recuperaron después de la II Guerra Mundial porque se atendieron los problemas, hubo una inversión seria para recuperar a esa generación. Pero en México no se quiere entender que estamos ante los efectos de una guerra y se está dejando todo a la simple sanación individual».

Si se aplicaran todas las políticas públicas que los expertos y académicos llevan años aconsejando llevar a cabo, los efectos se verían en un año. Si no, el destino es mucho más incierto. Por eso, madres como la de Lupe solo piensan en huir. «Por lograr que mis hijas crecieran seguras me iría al fin del mundo... si pudiera».

<http://periodismohumano.com>